



Un infierno llamado Tapachula

(Isáin Mandujano, pág. 32-37)

Tapachula, Chis.-Hacinados en cuartuchos o vecindarios por los que pagan sumas estratosféricas, estigmatizados por su condición de inmigrantes y presas de la incertidumbre, entre 40 mil y 50 mil haitianos, centroamericanos, sudamericanos y otros procedentes de países africanos deambulan por las calles de esta ciudad fronteriza.

Sumados a los 353 mil tapachultecos, estos inmigrantes sobreviven en la precariedad. Muchos están a punto de colapsar, cansados de esperar. Los agobian la discriminación y xenofobia de las autoridades, pero sobre todo el rechazo de la población local.

Los haitianos –mayoría en esta ocasión– recurren a todo para hacer más llevaderos sus días inciertos. Muchos venden comida, aguas frescas y refrescos embotellados, que trasladan en carretillas; otros ofrecen sus servicios en plena vía pública, como coser y reparar ropa; las mujeres tejen rastas y ponen extensiones de pelo a quien se los solicite o bien manicure o pedicure, algunos mues-tran sus habilidades como peluqueros.

También hay quienes venden frascos de aderezos haitianos, unos se ponen sus casacas y acuden a las telefónicas mexi-canas donde cambian chips a los celulares. Esas escenas se observan en todas las calles donde aparecen los inmigrantes.

Pocos son los haitianos que han sido contratados en el servicio de limpia municipal y ahora barren las calles. Lo hacen cabizbajos, en silencio. Están por todos lados. Nunca antes los tapachultecos habían visto una avalancha de tales dimensiones en el centro de esta ciudad fronteriza. Muchos desesperan porque las autoridades tardan en resolver su estatus migratorio.

La odisea

Jean Pierre Dupré, quien viajó de su natal Haití a Venezuela y lleva meses caminando hacia Estados Unidos, dice que estar en Tapachula es lo peor que le ha pasado; en ningún otro país de su accidentado itinerario ha sufrido tantas restricciones y agresiones, asegura.

Duerme hacinado en un cuarto, al lado de ocho de sus connacionales. Algunos, dice, llevan incluso un año espe-rando salir de Tapachula. Esa situación los estresa y los torna violentos, de ahí las peleas frecuentes en las calles y en los parques.



En las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), en las de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Ayuda a Refugiados se observan todos los días largas filas –se inician desde el amanecer– de inmigrantes que esperan ser atendidos.

Las calles aledañas se han convertido en un caos. Hacen falta baños públicos, contenedores de basura; la infraestructura resulta insuficiente para esta creciente población flotante que quiere salir de la ciudad y no puede.

Edú Deveaux, una joven haitiana, salió de su país rumbo a Colombia; de ahí subió por Panamá y recorrió todo Centroamérica hasta llegar a Tapachula, donde tiene más de un mes varada. Ha sufrido discriminación, comenta; no le dan trabajo porque es negra y por su condición de extranjera irregular.

Joseph Fabré inició su migración hace tres meses. Dice que en ningún lugar le había tocado sufrir tanto como en Tapachula, donde el derecho al libre tránsito es violado por las autoridades mexicanas.

Al igual que muchos compañeros de viaje, insiste en que quiere irse de la ciudad, pues las rentas son tan altas que ya no pueden pagarlas, por eso muchos pernoctan en los parques. Su propósito, relata, no es quedarse en Tapachula, sino irse a otras ciudades del país o incluso llegar a Estados Unidos o Canadá.

José Pascual Necochea Valdez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Costa de Chiapas, dice que la migración está desbordando los límites de la tolerancia. Le preocupa la poca atención que las autoridades en sus tres niveles de gobierno le están dando a esta crisis.

Puntualiza: esta movilización masiva de migrantes es un riesgo de salud pública que las autoridades sanitarias no han volteado a ver, hay desempleo, hacinamiento y aglomeraciones en parques, plazas y mercados.

El empresario teme que esto llegue a un punto en donde se promuevan actividades ilegales al no tener ya los migrantes recursos para subsistir en esta ciudad. Es altamente probable que tras esto se incremente la prostitución, la venta de drogas, la venta ilegal de bebidas alcohólicas y el ambulante.

Según Necochea Valdez, los migrantes se dejaron engañar por el discurso de un presidente en campaña y luego electo, quien dijo que las puertas estaban abiertas para todos los migrantes. A finales de 2018, tras las primeras caravanas de migrantes, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, incluso refrendó ese discurso en Suchiate.



El discurso, la realidad

La realidad contradice ese doble discurso, pues los migrantes se toparon con un muro instalado en la frontera sur que se llama Tapachula; la frontera sur de Estados Unidos se extendió hasta la frontera sur mexicana, donde se construyó finalmente el muro que ahora estamos pagando los mexicanos, sostiene el empresario José Pascual Necochea Valdez.

Y añade: “Esto ya se salió de control”. Si bien los servicios públicos no eran los mejores para la población local, ahora la ciudad está colapsada. Según sus cálculos, son ya 120 mil los migrantes varados, quienes se sumaron a los casi 360 mil tapachultecos.

Jorge Eduardo Elorza, empresario hotelero del centro de Tapachula, sostiene que en esta región de la frontera sur la migración es desordenada. Las autoridades les pintaron una situación de bonanza y bienestar a muchos migrantes, que resultaron no ser ciertas.

Aquí no hay empleos para los mexicanos, menos aún para quienes migran sin papeles. Aquí la realidad es lacerante para ellos, abunda.

Se queja porque esos migrantes no tienen dinero para pagar hoteles como los del centro de Tapachula; prefieren pagar rentas en posadas y vecindarios de las colonias de la periferia.

Para César Cañaveral, coordinador de Dimensión Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Tapachula y párroco de la iglesia del Señor de Esquipulas en esta ciudad, el gobierno está rebasado.

Si bien ahora la crisis la detonaron los migrantes haitianos, el gobierno no debe perder de vista que también hay cubanos, dominicanos, hondureños, nicaragüenses, salvadoreños y venezolanos.

El hacinamiento, puntualiza, es provocado por el propio gobierno. Si hoy habla de una contención migratoria, su discurso es muy contradictorio.

“No sólo estamos viviendo una crisis migratoria, esto es ya una emergencia migratoria, Tapachula es una ciudad muy pequeña para albergar a miles de migrantes, y no tenemos los suficientes recursos para darles atención”, dice Cañaveral, quien también es director del Albergue Belén para migrantes.

Señala que los migrantes son presa fácil para el gobierno. Las autoridades los sacan de los hoteles y los llevan a la Estación Migratoria Siglo XXI, que es una verdadera prisión.



Y aclara: las caravanas se generan porque los migrantes ya no quieren quedarse en Tapachula, sino seguir migrando; las caravanas son una acción desesperada para ellos.

Acá no hay trabajo, sería darle una carga pesada a Tapachula. Por eso el silencio cómplice del municipio y del gobierno estatal; las políticas migratorias del gobierno mexicano son las ocurrencias del presidente en su mañanera de cada día, insiste el párroco de la iglesia de El Señor de Esquipulas.

Dice estar en desacuerdo con las formas como el gobierno reprime a los migrantes: “Creo que deberíamos ser más humanos”. Los migrantes ya no quieren estar acá, ellos necesitan un documento para transitar. En su desesperación buscan la manera de sobrevivir en Tapachula, ganar dinero de la venta callejera, del ambulante.

Una ciudad atribulada

En el primer cuadro de Tapachula hay hacinamientos en colonias como Los Ángeles, El Paraíso, Xochimilco, Casas Geo; también proliferan en la periferia tapachulteca.

En entrevista, Wilner Meteleus, quien se define como un investigador social, internacionalista y es presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos (CCDNAM), externa su preocupación por la flagrante violación a los derechos humanos de sus connacionales.

Meteleus dice que miles de migrantes haitianos y de otras nacionalidades están varados, sin trabajo ni recursos para comer o pagar una renta; lo peor, carecen de acceso a los servicios de salud.

Según el activista, hay un doble discurso del gobierno mexicano. Por un lado el presidente Andrés Manuel López Obrador dice en las mañaneras que se respetan y respetarán siempre los derechos humanos de los migrantes, pero en la realidad eso no es así, pues en Tapachula hay represión, persecución y una cacería indiscriminada contra los migrantes.

La brutalidad de los agentes del INM y de la Guardia Nacional para reprimir cualquier intento de querer romper el muro que se les ha impuesto a los migrantes está documentada, asegura Meteleus.

Y califica a la Estación Migratoria Siglo XXI como una prisión que hoy alberga a unos 600 de los migrantes haitianos, por más que el gobierno insista en crear un “campamento humanitario”. No es más que un juego de palabras para llamarle así a otra prisión que pretenden habilitar.



Como nunca antes, Tapachula es ahora un infierno para los haitianos y migrantes de otros países. Deportar a un haitiano en las condiciones en las que ahora se encuentra ese país, es un crimen. Pues ellos vienen huyendo de la violencia, inseguridad, hambre, desempleo y los desastres naturales que han devastado ese pequeño país del Caribe.

Metaleus rechaza los supuestos “campos humanitarios” que, insiste, son centros de concentración ilegales contra la migración y contrarios a la normatividad internacional, por lo que exige al gobierno de López Obrador facilite los trámites administrativos de la migración ante las instancias correspondientes y garantice las condiciones humanitarias a los migrantes durante su estancia en el país.

Resistencia y denuncia

Metaleus dice que México dejó de ser solidario con los migrantes como en el siglo pasado: hoy se observa un grave retroceso.

Irineo Mujica, representante de la organización Pueblos sin Fronteras, coincide con Metaleus. Con lo que pasa ahora en la frontera sur, la lucha y la defensa de los derechos humanos a favor de los migrantes ha retrocedido como 15 años, asegura el activista, al tiempo que anuncia que iniciará un ayuno a favor de los migrantes frente a la Comar, para denunciar la persecución brutal de que son objeto, similar a la de 2007.

“Hemos retrocedido en materia de derechos humanos. La realidad está aquí.

Los hermanos migrantes nos dicen: ‘Estamos acorralados: dónde vamos a dormir, dónde vamos a comer; no nos quieren dejar salir de Tapachula’.”

Le preocupa, dice el activista, quien prepara una caravana de migrantes para el miércoles 15, que el gobierno federal no atienda la migración en la frontera sur, así como el discurso de López Obrador, quien miente al decir que los protege para que no corran riesgos en su itinerario.

Su manera de protegerlos, asegura Mujica, es paradójica, pues le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos; ha hecho de la política del garrote su política migratoria. “Siento que este gobierno es racista contra los negros, discriminan a los negros, la cultura negra es despreciada”.

Recuerda que, como presidente de Estados Unidos, Donald Trump era racista, y aunque ya se fue dejó escuela y formación en los funcionarios mexicanos como Francisco Garduño, quien ya debió haber renunciado a su cargo, pero López Obrador lo sigue sosteniendo.



Dice que la migración en la frontera sur no puede contenerse sólo con violencia. Acá en esta región no ha evolucionado la política migratoria; por el contrario, hay una involución. Y aunque las autoridades de la 4T “se digan de izquierda, son elitistas y discriminadores”, remata Mujica.

El activista de Pueblos sin Fronteras y Luis Villagrán han hecho sinergia para interponer recursos de amparo por violación a un trámite administrativo migratorio, que no debe superar los 30 días –algunas veces demora meses–; hay casos en que los solicitantes han sido cita-dos para enero o febrero de 2022.

Ambos buscarán interponer otros recursos de amparo por violación al libre tránsito.

Las caravanas, producto de sistemas políticos fracasados

(Isaín Mandujano, pág. 34-37)

Tapachula, Chis.- Una crisis en todas sus dimensiones: pobreza, corrupción, centralización del poder, violencia, crimen, narcotráfico, modelo económico fallido y otros factores afectan a unos 22 millones de personas en Honduras, Guatemala y El Salvador. Son causas de una migración alarmante, advierten miembros de la Compañía de Jesús.

En un informe exponen su postura: En México y Centroamérica ante las migraciones forzadas. Analizan con detalle el modelo económico, el modelo de Estado, los sistemas de protección social y las reformas fiscales necesarias, los derechos humanos, la (in)seguridad y militarización, el y tráfico de armas, así como la calidad ambiental para la sostenibilidad del bienestar; desnudan también la trágica realidad que ha propiciado el masivo desplazamiento forzado de migrantes.

Centrado en la migración del norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) y su relación con México y Estados Unidos, en su documento los jesuitas externan su preocupación por las condiciones históricas de desigualdad socioeconómica de la región y la violencia, y hacen propuestas para atender las causas estructurales y culturales de las migraciones forzadas en la región.

Sostienen que la migración humana contemporánea es una realidad compleja que rebasa las dinámicas propias de cada país e implica la colaboración con otros contextos.

Con base en la información recabada en foros con especialistas regionales, el informe sostiene que la migración se deriva de la pérdida de esperanza de muchas familias, atenazadas por la hostilidad en sus comunidades y en sus países. Y es esa falta de perspectivas la que los mueve a buscar protección internacional para salvarse de la inseguridad, violencia y su precaria economía doméstica.



A muchos los atrae Estados Unidos, donde las oportunidades laborales son mucho mayores que las de Honduras, El Salvador o Guatemala. Por eso salen en familia; otros van en busca de los que se fueron hace años.

El análisis enumera siete causas estructurales, entre ellas la desigualdad de oportunidades para el desarrollo humano pleno asociada a un modelo económico; la desilusión hacia los procesos democráticos existentes y que se asocia a un modelo de Estado; la deficiencia de los sistemas tributarios y de protección social, y la influencia del narcotráfico y el tráfico de armas.

De igual forma, la inseguridad, militarización y sistemática violación de los derechos humanos; la vulnerabilidad frente a las amenazas inducidas por el cambio y la variabilidad climática, y el horizonte individualista de la vida unido al universalismo que prioriza las categorías globales sobre las locales.

Un modelo aniquilador

Señalan los jesuitas que el modelo económico de Centroamérica genera pobreza, degradación ambiental y desigualdad. La región se encuentra sin convergencias estratégicas internas y externas que hacen ver un futuro incierto e inestable.

“Se tienen bajos niveles de inversión pública y privada, baja recaudación tributaria y la prevalencia de privilegios fiscales, lo que es muy inconveniente porque se enfrenta una situación de incapacidad y efectividad de los Estados, no sólo en materia de servicios públicos, sino en materia de gobernabilidad en los territorios”, dice el análisis de 14 páginas.

El crecimiento demográfico unido a niveles altos de violencia y una urbanización acelerada hacen una combinación riesgosa para la estabilidad social de Centroamérica. Además, las actividades económicas dominantes concentran los bienes naturales y generan impactos que los agotan, degradan y contaminan.

Explican que los mecanismos de redistribución de la riqueza no están funcionando, tampoco el mercado de trabajo ni la política fiscal, lo que imposibilita la provisión de bienes y servicios públicos. Guatemala es uno de los tres países con el menor gasto público en el mundo.

Señalan que en los países mencionados no se tienen suficientes recursos para hacer y cumplir lo que establecen sus constituciones, sobre todo por los privilegios fiscales. A esto se une la corrupción en casi todos los niveles del Estado.

En El Salvador los niveles de corrupción se concentran en los gobiernos locales; en el caso de Honduras se concentra en el gobierno central; en Guatemala está en todos los niveles, en todos los organismos del Estado, tanto a nivel central como local y en las relaciones público-privadas.



Uno de los cambios más significativos en estas últimas décadas es la pérdida de la capacidad de autosuficiencia alimentaria (maíz, frijol, arroz, trigo) con la consecuente mayor utilización de divisas para la compra de alimentos con crecientes precios, lo que tiene impactos en la ausencia de empleos e ingresos para la población en estos rubros. Lo que da la profundización de la precariedad de un segmento importante de hogares rurales que tienen formas diversas de trabajo.

Las propuestas

En su informe, los jesuitas explican que la migración forzada es un factor favorable para este sistema político fracasado, en el cual las remesas permiten mantener el modelo de crecimiento económico actual.

Proponen cambios macroeconómicos, como buscar una mayor progresividad del sistema tributario, así como atraer más inversión extranjera, generar empleo con mejores salarios; mejorar la productividad de los impuestos actuales.

En parte, la tendencia a la disminución de la tributación en Guatemala y en Centroamérica se está dando por estos efectos: más privilegios fiscales y mayor evasión en los impuestos que ya existen; generar incentivos para la gestión ambiental y otros.

Lo más importante, agregan, es la creación de empleo bien remunerado y estable en territorios expulsores de migrantes, fortalecimiento de la micro y pequeña empresas, acceso y regularización de la tierra, y otros recursos naturales.

Además de la endeble democracia, los jesuitas destacan el involucramiento de los sectores políticos, económicos y de gobierno en corrupción, crimen organizado y violación de derechos humanos.

“La debilidad institucional de los Estados centrales, subcentrales y locales o municipales ha sido utilizada por las élites nacionales para sacar ventajas en sus intereses económicos, siendo beneficiados por las prácticas de corrupción y la impunidad que laceran la vida social, sin entender que el desamor a su nación hace insostenibles sus negocios a largo plazo”, dice el documento.

Cuestionan la desigualdad producida por un modelo económico excluyente y un modelo de Estado ineficaz, que no garantiza el respeto a los derechos humanos; ha sembrado enojo y frustración social que fácilmente es retomado por los grupos criminales para seguir incorporando ciertos perfiles de jóvenes o personas migrantes a sus filas.



Pero sobre todo, la incapacidad en estos países por comprender y atender las causas de las movilidades humanas forzadas y la violencia juvenil ha fortalecido la militarización de la región, optando por aplicar la fuerza represiva para resolver un problema de desigualdad socioeconómica.

Les preocupa el incremento de la presencia del crimen organizado y la delincuencia común, pues en los últimos años se han diversificado sus negocios para organizar a las bandas delictivas locales y han apostado a la “pacificación” de territorios para posicionar su economía criminal.

Asimismo, que Centroamérica se ha constituido en un importante puente de tráfico de drogas y armas proveniente del sur hacia Estados Unidos.

“Tal parece que se negocia con los grupos delictivos la disminución de homicidios con la permisividad de la venta de droga”, advierten los jesuitas.

Narcotráfico, migración, violencia, tráfico de armas...”somos parte del problema”: Juan González, asesor de Biden

(J. Jesús Esquivel, pág. 20-24)

Washington.-La presidencia de Joe Biden está de acuerdo con la de Andrés Manuel López Obrador: la fórmula contra el narcotráfico no es hacer una guerra en las calles, porque eso no funciona. Ni detener a capos que fácilmente se reemplazan. La Iniciativa Mérida está rebasada y hay que revisar a fondo la relación en seguridad, reconociendo la dificultad de Estados Unidos de controlar el trasiego de armas. También es necesaria una revisión en materia migratoria porque la frontera sur mexicana “está en el límite” de la llegada de personas de otros países.

“Como cualquier otra estrategia, la Iniciativa Mérida tiene que evolucionar con el tiempo y estamos de acuerdo con el gobierno de México en que tenemos que pensar en una nueva estrategia”, enfático dice a Proceso Juan González, asesor del presidente estadounidense.

Durante una larga entrevista realizada en la Casa Blanca, González, director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional del gabinete de Biden, hace un análisis agudo sobre la cooperación binacional en materia de seguridad en la lucha contra el narcotráfico

“La relación de seguridad entre Estados Unidos y México ha evolucionado a través de las décadas, en algunos momentos era muy buena, en otros, no muy buena”, reconoce el encargado en la Casa Blanca de los temas con México y el resto de los países del continente.



González, quien este año en diversas ocasiones viajó a la capital mexicana acompañando a la vicepresidenta de su país, Kamala Harris, y a varios miembros del gabinete de Biden para sostener reuniones con López Obrador, habla de un componente distinto en la guerra contra el narco.

“Buscar en los puertos, buscar las áreas de logística, a los jefes de las plazas que manejan el flujo (de narcóticos) de una forma más estratégica, no hacer una guerra en las calles; hemos aprendido que las tácticas de objetivos muy altos no tienen impacto de largo plazo”, dice.

Iniciativa Mérida

La Iniciativa Mérida, instrumentada en México por el expresidente de Estados Unidos George W. Bush en el sexenio de Felipe Calderón, fue timón de una guerra militarizada contra el narcotráfico que en ese periodo presidencial y en el de Enrique Peña Nieto no dio resultados.

Para González, uno de los principales asesores del presidente de Estados Unidos en asuntos de seguridad y de inmigración, la Iniciativa Mérida fue un instrumento bilateral de respuesta del momento que se vivió hace 15 años y que estrechó la cooperación en seguridad entre las dos naciones.

Fue precisamente el pasado mayo cuando, encabezando una delegación de funcionarios estadounidenses –los jefes de la DEA y el FBI, entre otros–, González viajó a México para iniciar con el gobierno de López Obrador las negociaciones para de-finir una estrategia nueva.

Sin definir el nombre ni detalles del próximo proyecto bilateral para contener el narcotráfico y el crimen organizado, el asesor de Biden adelanta que se concentrará en reconocer y aceptar las responsa-bilidades que tiene Estados Unidos en el flagelo que azota muy fuerte a México.

“En México es donde nosotros reconocemos la responsabilidad que tenemos en cuanto a la demanda de drogas y el tráfico de armas que llegan a las calles mexicanas y a manos de los cárteles de narcotráfico”, apunta el asesor del presidente Biden. “Como mexicano es muy difícil ver una solución viable sin que Estados Unidos tome acciones concretas en esas dos áreas”, agrega González en la entrevista.

Esta es en varias décadas la primera ocasión en que la Presidencia de Estados Unidos admite un mea culpa en las implicaciones del narcotráfico en México que, con la violencia que genera, ha causado decenas de miles de muertes y diversas masacres desde el sexenio de Calderón.



“Los capos se reemplazan, por eso tenemos que buscar la cadena de suministro de drogas, la arquitectura financiera de ese mercado y obviamente algo que es una prioridad para el presidente López Obrador: el desarrollo en la inversión económica”, comenta el entrevistado.

La incursión de personas en el negocio del trasiego de enervantes es porque “tal vez” no tienen otra alternativa económica, reconoce el consejero de Biden, por lo que ahora, desde otra perspectiva, la nueva cooperación bilateral se abocará a un proyecto en ese sentido.

“México es un país soberano y su presidente toma decisiones sobre las prioridades para él, el interés de Estados Unidos es buscar en dónde podemos encajar de una forma que tenga impacto”, anota el asesor.

De esto se desprende que la Casa Blanca no haya tomado como un desdén cuando el canciller Marcelo Ebrard declaró que la Iniciativa Mérida estaba terminada.

“No lo vimos como una crítica; es darle vuelta a una página para asumir un nuevo análisis de cómo Estados Unidos y México pueden tener una cooperación en el ámbito de seguridad, basada en responsabilidad compartida y estrategias que tengan impacto”, resalta González.

El respeto a las leyes y soberanía de México son dos factores extirpados de la cooperación bilateral por Estados Unidos en el combate al narcotráfico a través de la Iniciativa Mérida y en amenazas como la del expresidente Donald Trump de enviar a soldados del Pentágono a combatir a los cárteles mexicanos y declararlos grupos terroristas.

Una de las primeras acciones de López Obrador para detener esa injerencia de Washington ante un problema derivado de la demanda y consumo de drogas de Estados Unidos fue cambiar las leyes del país para controlar y registrar las acciones de agentes extranjeros que operan en México.

En paralelo, el arresto por la acusación de narcotráfico en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, abonó a la decisión de AMLO de incluso expulsar del país a los agentes estadounidenses y en especial a los de la DEA, a menos que se ajustaran a la nueva ley de rendición de cuentas de sus acciones.

“El gobierno mexicano determina sus leyes y es un país soberano que puede tomar ciertas decisiones”, declara González al ser cuestionado sobre las leyes que a regañadientes acatan sus agentes, como los de la DEA.



“Cuando nosotros entramos al gobierno sí había un poco de alarma alrededor de la ley, pero lo que hicimos fue, uno, analizarla; dos, tener una conversación muy directa con el Departamento de Justicia para saber si en realidad estaba teniendo impacto sobre la cooperación; y número tres, determinar si donde tuvo impacto había camino para que pudiéramos dialogar con México, mejorar esa cooperación y buscar nuevas áreas de colaboración”, resume González.

Ebrard, en una de las entrevistas concedidas a este semanario, informó que desde abril de este año, mensualmente los agentes de la DEA y de otras agencias estadounidenses que operan en México entregan a la SRE un informe puntual sobre sus actividades, entradas y salidas del país.

“Te digo”, enfatiza el asesor de Biden al reportero, “basado en nuestro análisis, el impacto no fue grave fundado en la ley, y una de las conclusiones del viaje que hice a México (en mayo pasado) con la DEA, el FBI y varios, fue que encontramos caminos de cooperación”, aclara.

Los nuevos vientos de trabajo bilate-ral bajo la presidencia de Biden no permiten, de acuerdo con González, que Estados Unidos tome “acciones unilaterales sin tener más coordinación con México”, y esto, matiza el asesor presidencial, ya se le informó a la DEA, a otras agencias federales y al propio procurador general de Justicia, Merrick Garland.

Trasiego de armas

El gobierno de Biden reconoce que la coo-peración en seguridad y combate al tráfico de drogas ilícitas no tendrá avances mientras Estados Unidos no contenga la demanda y el consumo de estupefacientes, pero también el flujo de armas que corre de norte a sur, y el lavado de dinero.

López Obrador insiste en su exigencia a la Casa Blanca para que haga mucho más en lugar de prometer sólo coopera-ción, para evitar que las armas que se fabrican y se venden en Estados Unidos con mucha facilidad lleguen a México y empoderen al crimen organizado y a los cárteles del narcotráfico.

Frente a la falta de acciones e innumerables promesas de la Casa Blanca acerca de tomar medidas en las peticiones de México sobre el tráfico armamentista, el pasado 4 de agosto el gobierno de López Obrador demandó a la industria de las armas ante una Corte federal en Massachu-setts, responsabilizándola del trasiego y de la muerte de miles de mexicanos.

“En cuanto a la demanda, no puedo dar una posición del gobierno de Estados Unidos, pero lo estamos siguiendo muy de cerca”, tajante, responde el asesor del presi-dente Biden a una pregunta sobre el asunto.



Para darle sustento a esta admisión, el asesor presidencial recita las constantes masacres, incluidas las de niños, que se registran en varias ciudades y pueblos en Estados Unidos, ligadas directamente a la laxitud de las leyes sobre la venta de armas y municiones.

“Aún no podemos tener una conversación sensata sobre este tema; es algo que demuestra la polarización en Estados Unidos; es decir, no es por no querer, hay un cabildeo que busca proteger las ganancias de esas compañías por encima de las vidas humanas que se pierden”, aclara González.

La violencia que priva en México relacionada directamente con el narcotráfico expone la facilidad con la que armas de alto poder –como rifles calibre .50, fabricados en Estados Unidos– terminan en manos de los cárteles que las usan también para intimidar al gobierno mexicano.

Dos ejemplos: el operativo fallido en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, en el cual los criminales doblegaron al gobierno llevando a cabo ataques con armas de alto poder.

Otro, el atentado del 26 de junio de 2020 en la Ciudad de México contra Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad del gobierno capitalino, en el que él resultó herido y tres policías perdieron la vida al ser atacados con rifles automáticos calibre .50.

“Reconocemos que nosotros somos parte del problema cuando hablamos de los cárteles que, en muchos casos, como lo que vimos en Culiacán, tenían armas más potentes que los policías, y en el ataque en la Ciudad de México donde se usaron rifles calibre .50; eso es una barbaridad”, insiste.

Para mermar el flujo de armas y de acuerdo con el entrevistado, se reforzará la labor del rastreo de armas incautadas en México para que las autoridades estadounidenses intercambien información de inteligencia.

Al mencionar al Cártel de Sinaloa, se le cuestiona a González sobre si al gobierno de Biden le llamó la atención, o tiene alguna opinión, sobre la deferencia que tuvo López Obrador con María Consuelo Loera, madre del Chapo, el 29 de marzo de 2020 durante una gira por Badiraguato.



“Sobre la mamá del Chapo es difícil que yo comente al respecto, porque no tengo todos los detalles. Lo que sé es que en las fronteras de México, aun en años anteriores a López Obrador, muchos mexicanos inocentes perdieron la vida; y la pregunta es: ¿cuál es la respuesta adecuada para asegurar que México y los mexicanos vivan en paz? Lo que puede y debe hacer Estados Unidos es controlar el flujo y la demanda de drogas para trabajar de forma estrecha con México y tener un impacto real. El debate aquí sobre cuál es la mejor respuesta política es algo que forma parte de un debate sensato; debemos ignorar a la política y enfocarnos en lo que funciona”, contesta el integrante del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Migración

La constante llegada de centroamericanos y haitianos por la frontera sur de México, que en días recientes provocó enfrentamientos violentos con efectivos de la Guardia Nacional, es un aspecto de preocupación para la relación con Estados Unidos.

Biden había suspendido la imposición unilateral de Trump del plan Quédate en México para con los migrantes centroamericanos, pero una Corte federal en Texas ordenó al gobierno estadounidense rehabilitarlo y luego fue refrendado por la Suprema Corte de Justicia estadounidense.

“La decisión del Quinto Circuito (Texas) y la de la Suprema Corte es tema nuestro porque las cortes estadounidenses no tienen autoridad en México”, expone González en entrevista con Proceso.

El tema migratorio que Biden discute con el gobierno de López Obrador se concentra en crear un sistema futurista con un carácter más humano.

—¿Cuál es la posición del gobierno de Biden sobre la violencia que ha utilizado la Guardia Nacional de México para disuadir a las caravanas de migrantes centroamericanos y haitianos? —se inquiriere a González.

—Las conversaciones que estamos teniendo nosotros no se concentran en bloquear la migración, sino hacerlo de una manera ordenada y segura; esto quiere decir fortalecer la vigilancia de las fronteras. Personas que no tienen petición viable de asilo tienen que ser expulsadas, no hay de otra; hay muchas personas que piden asilo aunque no lo merezcan.



“Estados Unidos tiene la convicción de invertir en el sur de México, ir tras los grupos criminales dedicados al tráfico de personas, crear empleos temporales para quienes cumplan con los requisitos para asumirlos y colaborar con México en ese sentido. Las imágenes de los haitianos (golpeados por la Guardia Nacional) son muy desafortunadas, pero la realidad es que México está tomando esfuerzos enormes, que se tienen, que reconocer para brindar-le asilo a muchas poblaciones. A nosotros nos están dando una ayuda enorme para manejar el flujo migratorio ya que nuestra frontera (del sur) está sobre el límite en el flujo migratorio.”

—¿No hay preocupación por la violación de derechos humanos de los migrantes por la Guardia Nacional —se le insiste.

—No. No puedo criticar lo que está haciendo México porque está protegiendo sus fronteras y a la vez está haciendo todo lo posible y más allá de eso para brindarle protección a personas con petición de asilo.

—¿Tampoco preocupa al presidente Bi-den, uno de los principales opositores a la militarización de las fuerzas civiles, que el gobierno de López Obrador esté militarizando al país y a la Guardia Nacional?

—Tenemos confianza en las instituciones mexicanas y en el pueblo de México de que lleguen a sus propias conclusiones de cómo manejan estos asuntos. No podemos opinar qué le conviene a México. El tema de la Guardia Nacional, cuando se tiene un país tan grande, es que es una herramienta a disposición del gobierno federal y estatal para vigilar y resguardar las fronteras. Los mexicanos saben qué dirección quieren para su país y no conviene que el “gigante del norte” opine sobre cómo ellos manejan esto —concluye Juan González.